

52-D-19

TRIBUNAL DE ÉTICA GUBERNAMENTAL: San Salvador, a las diez horas con diez minutos del día doce de junio de dos mil veinte.

El señor [REDACTED] presentó denuncia en esta sede en contra de la licenciada Lilian Carolina Reyes Rojas, Mediadora de la Unidad de Mediación y Conciliación de la Procuraduría General de la República de San Miguel (PGR) [fs. 1 al 3].

Al respecto se hacen las siguientes consideraciones:

I. El denunciante, en síntesis, señala que recibió una cita de la PGR para una audiencia a la cual no pudo asistir por encontrarse fuera del país, pero a su regreso se presentó a dicha institución con la licenciada Lilian Reyes para conocer del caso por el cual había sido citado, quien le expresó que el procedimiento se había cerrado y trasladado a la Fiscalía General de la República por lo que tenía que preguntar en dicha institución y esperar a que lo llamaran.

Agrega que dada la negatividad de la licenciada Reyes acudió a su hermano para arreglar el problema que había originado ese proceso, ante lo cual éste le expresó que llamaría a la licenciada Reyes para que los atendiera y en esa ocasión dicha profesional sí abrió el caso y escuchó sus alegaciones.

Señala que acordaron que él le entregaría a su hermano la cantidad de doscientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$200.00) el día diez de julio del año dos mil dieciocho, asignándole la licenciada Reyes fecha para el pago de los quinientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$500.00) restantes, sin conocer sus ingresos, por lo que solicitó otra audiencia por medio de un abogado pero no se llegó a ningún acuerdo; asimismo, en dicha audiencia solicitó copia del acta pero esta le fue negada por la servidora pública.

Finalmente, expresa que con fecha diecinueve de marzo del presente año, el Juzgado Especializado de Instrucción para una vida libre de violencia y discriminación para las mujeres de San Miguel emitió resolución en la que le dictan medidas de protección interpuestas por la licenciada Reyes, por lo que considera que se trata de represalias en su contra y que al encontrarse a su hermano, este le dijo que tuviera cuidado con la licenciada Reyes porque ella quería afectarlo, considerando esto como una amenaza por medio de su hermano, asumiendo que “ellos están en comunicación” (sic).

II. El poder sancionatorio que tiene este ente administrativo contralor de la ética en la función pública, ha sido habilitado constitucionalmente por el Art. 14 de la Constitución, siendo una potestad jurídicamente limitada por la ley, que constituye una de las facetas del poder punitivo del Estado.

El ejercicio de las facultades y competencias del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), es un reforzamiento de los compromisos adquiridos por el Estado a partir de la ratificación de la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las

Naciones Unidas contra la Corrupción. Es así como el legislador, consciente de la importancia que el desempeño ético de la función pública reviste en un Estado de Derecho, estableció un catálogo de deberes que rigen el actuar de todos aquellos que forman parte de la Administración Pública; además, de un listado de conductas que conforman materia prohibitiva para el proceder de estos sujetos.

De tal forma, el procedimiento administrativo sancionador competencia de este Tribunal tiene por objeto determinar la existencia de infracciones a los deberes y prohibiciones éticas reguladas en los artículos 5, 6 y 7 de la Ley de Ética Gubernamental, en lo sucesivo LEG, y sancionar a los responsables de las mismas.

No obstante ello, el artículo 81 letra d) del Reglamento de la LEG establece como causales de improcedencia de la denuncia o aviso que el hecho denunciado sea competencia exclusiva de otras instituciones de la Administración Pública.

III. Del relato de los hechos, se colige que el denunciante considera que podría estar siendo amenazado por la licenciada Lilian Reyes, debido a que se le dictaron medidas de protección interpuestas por dicha servidora pública en el Juzgado Especializado de Instrucción para una vida libre de violencia y discriminación para las mujeres, del departamento de San Miguel.

En atención a lo anterior, se advierte que el hecho denunciado no constituye o perfila aspectos vinculados con la ética pública, pues se refieren a las medidas dictadas por el Juzgado Especializado de Instrucción para una vida libre de violencia y discriminación para las mujeres; por lo que resulta necesario aclarar que el conocimiento de dicho señalamiento no puede ser fiscalizado por este Tribunal.

En consecuencia, y determinando que los hechos descritos no aportan elementos de una posible transgresión a la normativa ética, debe señalarse que, para considerar una posible infracción administrativa, deben existir elementos que indiquen un *“comportamiento contraventor de lo dispuesto en una norma jurídica, ya sea por realizar lo prohibido o no hacer lo requerido (...)”* (Sentencia 92-P-2000, de fecha 03-XII-2001, Sala de lo Contencioso Administrativo); y en el presente caso, de la conducta señalada no se advierten contravenciones a la ética pública dentro de la tipificación delimitada por la LEG.

En razón de lo anterior, debe declararse improcedente la denuncia respecto a los hechos antes relacionados, según el artículo 81 letra d) del Reglamento de la LEG.

No obstante la imposibilidad por parte de este Tribunal de controlar las conductas señaladas, esto no significa una desprotección de los derechos que pudieran verse comprometidos, sino únicamente que deberán ser otras instancias las que, dentro de sus competencias, evalúen y determinen las responsabilidades que correspondan; pudiendo el denunciante, si así lo estima pertinente, avocarse a las mismas a fin de señalar lo ocurrido.

Por tanto, y con base en los artículos 1, 5 y 6 de la LEG y 81 letras b) y d) de su Reglamento, este Tribunal **RESUELVE**:

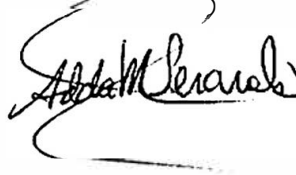
a) *Declárase improcedente* la denuncia presentada por el señor [REDACTED] [REDACTED] contra la licenciada Lilian Carolina Reyes Rojas, Mediadora de la Unidad de Mediación y Conciliación de la Procuraduría General de la República de San Miguel, por las razones expuestas en el considerando III de esta resolución.

b) *Tiénese* por señalado como lugar para recibir notificaciones, la dirección que consta a folio 3 del presente expediente.

Notifíquese.



PRONUNCIADO POR LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL QUE LA SUSCRIBEN



Co2